



POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA, DEMOCRÁTICA Y POPULAR

Compañero: has notado que año con año las condiciones en que estudiamos se deterioran, que cada vez son menos chavos los que logran entrar a una carrera, y que los que somos aceptados tenemos que pagar costos cada vez más elevados como transporte, fotocopias, materiales de estudio, comidas y en algunos casos alojamiento. En la UNAM a nivel bachillerato únicamente el 23 % de los alumnos puede solventar con comodidad sus estudios, para el otro 77% que cuenta con menos de 50 pesos diarios, el comer adecuadamente es un lujo; la situación no es muy distinta en licenciatura donde un 74% tiene un ingreso

familiar menor a los seis salarios mínimos; mientras tanto, los materiales de estudio son más costosos y los alimentos y fotocopias siguen concesionados a los amigos del patronato universitario. Ante ello, las autoridades universitarias no hacen sino pedir mayor presupuesto, ofreciendo becas insuficientes, que además, en muchas ocasiones, suelen estar condicionadas a un interés o simpatía política, mientras mantienen sus salarios de entre 64 mil y 145 mil pesos mensuales, con un falso discurso que encubre el hecho de que se encuentran coludidas con el sector privado en la implementación de *planes y programas tendientes a mercantilizar la educación.*

Esta situación de crisis ha traído consigo el *agravamiento de la desigualdad, la exclusión y la pobreza*, reflejada en la falta de oportunidades que es particularmente aguda en a población joven, pues: dos terceras partes se encuentran en pobreza y casi el otro tercio sufre de alguna carencia social, por lo que más del 80% vive en situación de vulnerabilidad social (sin acceso a servicios de salud, seguridad social y derechos laborales); asimismo, del año 2000 a la fecha el desempleo en los jóvenes se triplicó, 60 % de los que trabajan reciben menos de dos salarios mínimos y 17 % no recibe remuneración, y alrededor de 7.5 millones de jóvenes no estudian ni trabajan.

En materia educativa, 36% de la juventud no rebasa la primaria, por lo que de cada 100 alumnos de primaria

sólo 6 alcanzarán egresar de licenciatura; 7 de cada 10 jóvenes en edad de cursar la educación superior no pueden hacerlo, aunado a esta desigualdad está la cobertura del 40 y 60 % de las principales ciudades del país en contraste con más de la mitad de los estados que apenas cubren un 20% de la demanda, es decir que sólo se garantiza parte de los jóvenes y se omite a los estudiantes de licenciatura. A ello se suma la brecha económica, pues sólo el 5% del sector poblacional más pobre estudia, en comparación con el 60% que sí accede a la educación superior de los sectores poblacionales más ricos. Esta **elitización** de la educación, tiende a recrudecerse gracias a que el gobierno no está interesado en un financiamiento sostenido, suficiente y progresivo a la



educación pública, principalmente del nivel superior, pues el gasto estatal se ha reducido sin responder a la creciente demanda de la población; contrariamente, las políticas gubernamentales han tendido a promover la **privatización** de la educación en todos sus niveles; basta ver los últimos decretos presidenciales con los cuales se hacen deducibles de impuestos las colegiaturas en escuelas privadas (financiándolas indirectamente con el presupuesto público), y el Proyecto de Financiamiento de la educación Superior que busca endeudar a las familias mexicanas con “créditos educativos” promoviendo la demanda hacia universidades privadas y relegando el necesario financiamiento y crecimiento de la matrícula de las universidades públicas. Dichas medidas se inscriben en reformas como: la Alianza por la Calidad Educativa (ACE), la Reforma Integral a la Educación Secundaria y

Media Superior (RIES y RIEMS), la reforma al estatuto para el Personal Académico en la UNAM, entre otras, que buscan **mercantilizar la educación mexicana**, lo cual afecta primordialmente los procesos pedagógicos en las instituciones públicas pues acentúan la verticalidad de las estructuras de gobierno excluyendo la participación amplia y paritaria de los estudiantes, académicos y trabajadores con el fin de continuar con la imposición de planes educativos dictados por organismos financieros internacionales que sirven a sus intereses mercantiles dejando de lado las necesidades de los sectores populares del país.

El **autoritarismo** prevaleciente a nivel nacional, y que se hace patente con la **militarización**, también se vive al interior de las instituciones educativas, reflejado en el llamado que distintos rectores de universidades públicas hicieron al gobierno pidiendo mayores recursos para seguridad, sin que realmente se pretenda mejorar las condiciones de estudio sino aumentar el control hacia las comunidades universitarias garantizando la verticalidad, corrupción y antidemocracia de las estructuras de gobierno excluyendo la participación amplia y paritaria de los estudiantes, académicos y trabajadores con el fin de continuar con la imposición de planes educativos dictados por organismos financieros internacionales que sirven a sus intereses mercantiles dejando de lado las necesidades de los sectores populares del país.

Ante tal situación, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la vereda que debemos tomar para que el estudiantado pugne por resolver la problemática educativa? Para que forjemos un movimiento estudiantil fuerte, tenemos que construir sobre las experiencias pasadas y presentes -la huelga del 99 en la UNAM, la lucha por comedores y fotocopias subsidiadas, así como el movimiento estudiantil chileno-; debemos elevar nuestro nivel de consciencia y participación para comprender que el problema se encuentra inserto en un contexto mayor, y por ende, requiere un nivel de organización y acción hacia un proyecto global con miras a una transformación en todos los ámbitos de la sociedad. Para resolver los problemas educativos en su totalidad hay que combinar las demandas de mayor matrícula y financiamiento a la educación junto con una lucha por la democratización y la igualdad en las condiciones de estudio (comedores y fotocopias económicos) poniendo la educación al servicio de las mayorías.

Es por eso que colectivos y activistas de distintas escuelas y universidades, vemos la necesidad de organizarnos con el fin de conformar un amplio movimiento que luche por **mejorar las condiciones de estudio, transformar democráticamente las formas**

de gobierno y defender la educación pública y gratuita de las acciones privatizadoras y elitistas. Convocamos a todos los estudiantes, profesores y trabajadores de la educación a organizarnos con el fin de conformar un *programa de lucha* que aglutine a las organizaciones y movimientos de distintas escuelas y facultades en un amplio movimiento que logre transformar la educación en nuestro país con el fin de ponerla al servicio de la sociedad y sus sectores mayoritarios.

Invitamos a todo aquel interesado a participar en la **Asamblea General Universitaria** que se llevará a cabo el próximo 16 de febrero en el auditorio Ho-Chi-Minh de la Facultad de Economía de Ciudad Universitaria a partir de las 16 hrs, con el fin de conformar un programa de lucha que retome las demandas de los estudiantes, profesores y trabajadores de la educación.

¡No a las reformas elitistas, privatizadoras y mercantilizadoras de la educación pública!

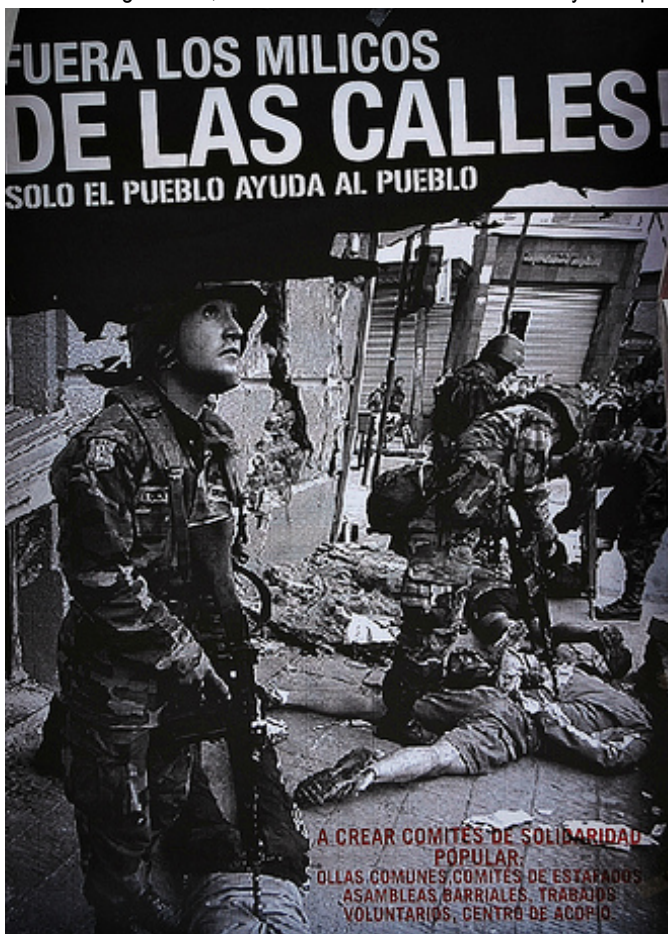
¡Democratizemos las universidades poniéndolas al servicio de la mayoría!

LA SUPUESTA “GUERRA CONTRA EL NARCOTRÁFICO” Y SUS CONSECUENCIAS

El 11 de diciembre de 2006, con más de 500 asesinatos en Michoacán, el gobierno calderonista decidió emprender la supuesta "Guerra contra el Narcotráfico", teniendo como antecedentes la creación en 2003 de la SIEDO, la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional (LSN), la implementación del Operativo México Seguro y la ASPAN en 2005, todo ello en el sexenio foxista. A través de operaciones militares en coordinación con la Marina y la PGR, así como Operaciones Conjuntas y policíacas como la CONAGO, el gobierno mexicano ha mostrado su disposición a hacer cumplir los acuerdos establecidos en la ASPAN que, renombrada en 2008 como Plan Puebla Panamá y teniendo sus antecedentes en el Comando Norte del Pentágono (NorthCom),

justifica el control y el combate militar para lograr la integración de América del Norte como zona segura de abasto de petróleo, gas natural, agua, uranio y biodiversidad para la economía estadounidense, lo cual va de la mano con la Iniciativa Mérida, establecida por EUA en acuerdo con México y países centroamericanos en 2008 para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

Desde entonces, bajo el pretexto de la poca funcionalidad de las policías locales, el gobierno federal ha sacado a más de 230 mil militares a las calles. En 2009 creó la Policía Federal, antes PFP, que con más de 35 mil efectivos reemplaza a los militares en las tareas de combate al narcotráfico y cumple con un gran porcentaje de las tareas policíacas en el país, incluidas la de reprimir a los movimientos sociales, como el caso de Ayotzinapa, Guerrero. El pasado 12 de diciembre, durante un bloqueo en exigencia de aumento a la matrícula estudiantil y otorgamiento de plazas a los egresados, los estudiantes normalistas de Ayotzinapa



fueron arremetidos a balazos por la Policía Federal en contubernio con la policía estatal y municipal. En la

confrontación fueron asesinados Gabriel Echeverría, Jorge Alexis, Edgar David Espíritu, y fueron perseguidos y torturados decenas de estudiantes, al grado que uno fue golpeado a manos de la policía local para obligarlo a declarar que llevaba un AK 47 y que había disparado durante la manifestación.

Con la permisión del flujo de armas "ilícito" demostrado con el operativo Rápido y Furioso, la presencia de la FBI y la CIA, el impulso de bases militares en Monterrey y Puebla, la inauguración de Museos del Ejército, la colaboración del duopolio televisivo y los medios adaptados que propagandizan el patriotismo bélico y la paz militar, el gobierno —su ejecutivo, su legislativo y su judicial— ha demostrado su acatamiento a los planes de cooperación y privatización, sometiendo a la población a una dinámica de guerra que ha logrado normalizar no sólo un lenguaje bélico, sino un estado de miedo y terror permanentes, una normalización de la violencia en términos de muertes, ejecuciones, desaparecidos, torturados, decapitados, desplazados, despojados, criminalizados.

Las consecuencias mortales de la militarización han llegado a tal grado que actualmente la Jornada discute con la PGR la cifra de homicidios y ejecuciones de 2006 a la fecha por diferencia de miles: mientras que la PGR declaró en enero una cifra de 47 453 homicidios, la Jornada publicó que, según un conteo periodístico, la cifra asciende a los 55 671 asesinatos. Esto sin mencionar las declaraciones del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) encabezado por Javier Sicilia, que denuncian 66 700 homicidios en lo que va del sexenio, aunado a los más de 10,000 desaparecidos, los más de 230 mil desplazados y 50 mil huérfanos. A tal situación se suma la cada vez más sistemática ejecución y desaparición de luchadores sociales y denunciantes, que en menos de dos años nos ha dejado con terribles heridas como las de la familia Reyes Salazar, Susana Chávez, las periodistas Marcela Yarce y Rocío González, los comuneros de Ostula Pedro Leyva y José Trinidad, el activista Carlos Cuevas y los

miembros del MPJD Nepomuceno Moreno, Julia Marichal, Eva Alarcón y Marcial Bautista.

A pesar de las onerosas consecuencias de la militarización, el gobierno de Calderón sigue firme en continuar con la supuesta "Guerra contra el Narco". Por un lado, pretende sistemáticamente legalizar el uso del ejército en cualquier circunstancia a la par que coarta los derechos y garantías individuales; la propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, legaliza la intervención del ejército en cualquier actividad considerada de seguridad nacional llámense manifestaciones, huelgas, bloqueos, etc quebrantando las garantías individuales y el derecho a la protesta principalmente, en un estado de excepción no reconocido formalmente pero ejecutado en la realidad; la reforma al Código de Procedimientos Penales establece criterios ambiguos y discrecionales para realizar detenciones y cateos arbitrarios, ambas propuestas del gobierno federal siguen esperando su aprobación en las cámaras. Por otro lado, amenaza a los activistas contrarios a la "guerra" que lo denunciaron a él y al Chapo Guzmán ante la Haya por delitos de lesa humanidad. Por si fuera poco inaugura la Estela de la Luz, un monumento dedicado a la corrupción y al despilfarro, que costó más de mil millones de pesos y está erigida sobre los más de 55 mil asesinados y los miles de jóvenes, mujeres, migrantes y trabajadores susceptibles de ser asesinados por sus condiciones de vulnerabilidad, sea por la precariedad, la falta de empleo o la violencia de género.

Al día de hoy queda pendiente la tarea de aprender las lecciones y errores del pasado para conformar un gran movimiento nacional, antimilitarista e independiente, que luce de manera combativa y congruente contra la militarización.

Jóvenes, estudiantes, trabajadores de la educación, administrativos, sindicalizados, derecho humanistas, amas de casa, los primeros pasos ya están dados: un movimiento contra la militarización se articula hoy en distintas partes del país.

!Unámonos para poner el freno de emergencia, no nos quedemos paralizados, confiemos en nuestras

reunion.general.universitaria@gmail.com

propias fuerzas y organicémonos para acabar con esta guerra!

!La organización es la solución!